PRONUNCIAMIENTO

RECHAZO A LA INSISTENCIA DEL CONGRESO DE MODIFICAR LA LEY FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE

Hoy, lunes 29 de agosto, el Congreso de la República buscará aprobar por insistencia la modificación de los artículos 29 y 23 de la Ley 29763, Ley forestal y de fauna silvestre, para incorporar disposiciones transitorias que actualizan los límites del bosque de producción permanente, y pone en riesgo nuestro patrimonio forestal y cultural, los ecosistemas y su biodiversidad, al facilitar la extensión de la deforestación de la Amazonía y continuar agrediendo los derechos de los pueblos indígenas.

El Poder Ejecutivo ha observado la propuesta luego que todos los organismos estatales competentes, han indicado que ocasionaría efectos negativos sobre nuestros recursos forestales y de fauna silvestre y las poblaciones locales que los conservan, va en contra no solo de la protección de la Amazonía, sino de todo el ecosistema nacional, y desnaturaliza el objetivo y fin de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre. Ningún sustento técnico ampara esta norma por demás atentatoria contra los intereses del país.

La norma que no debiera ser aprobada incluye una disposición complementaria final única, que exonera en adelante el requisito de aplicación de la Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor (CTCUM) y sobre autorización de cambio de uso de suelo. El CTCUM es una herramienta que permite categorizar técnicamente el suelo (cultivo permanente, cultivo en limpio, pastos, forestal o protección) de acuerdo con su potencial de uso. Este sería reemplazado solo por una presunción legal. Para colmo, excluye al Ministerio de Ambiente, de su rol rector responsable de gestionar el funcionamiento de los bosques de producción permanente y zonificación forestal. Tampoco se toma en cuenta el impacto que esa norma tendría sobre el derecho a los territorios ocupados por los pueblos indígenas.

Penosamente y dando un ejemplo lamentable, en momentos en que el derecho constitucional a gozar de un ambiente equilibrado, ha sido reconocido recientemente por la ONU como un derecho universal, el Perú puede estar de espaldas de lo que la humanidad entera se propone atender como preocupación central, aunado a los urgentes compromisos por hacer frente a los crecientes efectos negativos del cambio climático. Igualmente, los promotores de la norma vulneran otros compromisos internacionales como el Convenio 169 de la OIT referido al derecho a la consulta previa, al haberse solicitado ni recibido opinión de alguna organización que represente a los pueblos indígenas; así como el Convenio de París sobre Cambio Climático, la Declaración Conjunta de Intención (DCI) con Noruega y Alemania, el Acuerdo de Promoción Comercial (APC) con Estados Unidos, y los INDCs entre otros.

La aprobación a esta norma estaría dando un respaldo jurídico a prácticas ilegales al no distinguir el tipo de actor (de pequeña, mediana y gran escala) que las promueve, lo que permite la exoneración de responsabilidades (administrativas y penales) y se constituye en un incentivo negativo bajo la expectativa de legalizarlas a futuro los actos ilícitos, lo cuál a su vez pone en mayor riesgo a defensores ambientales en la Amazonía, quienes ya vienen luchando con todo en contra por el futuro de todos y todas.

Por todo lo indicado, instamos al pleno del Congreso de la República a no insistir en la aprobación de esta norma sustitutoria, ya que se convertiría en una nueva amenaza contra la vida, los ecosistemas, la biodiversidad y los territorios indígenas. Instamos a las organizaciones sociales estar vigilantes y movilizadas para actuar por la defensa de nuestra Amazonia y los derechos ambientales y sociales que ello implica, más aún ahora en plena emergencia climática mundial. Está en juego el futuro de nuestras poblaciones y nuestras posibilidades de adaptación frente a la crisis.